



CIRCULAR 180/2019

**EXCMO. SR. CONSEJERO
CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA**

Madrid, 15 de octubre de 2019

Querido Consejero y amigo:

Tal y como se informó en el Pleno del pasado día 11 de octubre, el Ministerio de Justicia ha abierto del trámite de audiencia e información pública en el Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, aprobado por el Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, cuyo plazo finaliza el día 4 de noviembre.

A este respecto, adjunto remito para tu conocimiento, el texto de Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita.

Te informo que ya en fecha 8 de julio de 2019, y a consecuencia del inicial trámite de consulta pública sobre la reforma del Reglamento, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de este Consejo General remitió al Ministerio de Justicia las alegaciones que igualmente te acompaño.

En estas fechas estamos reanudando los trabajos para formular las oportunas alegaciones al Proyecto de Real Decreto, e informaremos en unos días. No obstante te adelanto que insistiremos en la necesidad de que se concreten y actualicen de los requisitos de acceso a los servicios (Orden del Ministerio de Justicia de 3 de junio de 1997), así como otros aspectos que ya contemplábamos en las alegaciones antes aludidas.

Un abrazo

Fdo.: Antonio Morán Durán
Presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita
del Consejo General de la Abogacía Española



Borrador de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, aprobado por el Real Decreto 996/2003, de 25 de julio.

El artículo 119 de la Constitución española establece que la justicia será gratuita, cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

La Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, configura la prestación de la asistencia jurídica gratuita, consistente en la asistencia letrada, defensa y representación gratuita, como un servicio público organizado por los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Procuradores de los Tribunales de España y sus respectivos Colegios, garantizando, en todo caso, su prestación continuada y atendiendo a criterios de funcionalidad y de eficiencia en la efectiva aplicación de los fondos públicos puestos a su disposición.

La presente reforma del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, aprobado por Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, pivota sobre cuatro ejes fundamentales, que buscan adecuar el servicio de asistencia jurídica gratuita a la realidad actual, redundando, a la postre, en una mayor agilidad y mejora de dicho servicio.

El objetivo fundamental, por tanto, que inspira esta reforma, es reforzar el derecho a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos, a través del fortalecimiento del servicio de asistencia jurídica gratuita, máximo garante de dicho derecho.

En primer lugar, la presente reforma tiene como objeto actualizar la composición de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita acomodándolas a lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, Comisiones que ya fueron modificadas por el apartado 7 de la disposición final tercera de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

En segundo lugar, la reforma propuesta busca actualizar las remisiones que realiza el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita a leyes administrativas que ya han sido derogadas por la legislación vigente.

La modificación planteada del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita busca también consagrar normativamente, como regla general, el pago mensual de la subvención de asistencia jurídica gratuita, con cargo a las dotaciones presupuestarias del Ministerio de Justicia, por los

servicios de asistencia jurídica prestados en las Comunidades Autónomas que no han asumido competencias en materia de Administración de Justicia, así como el importe correspondiente a los gastos de funcionamiento e infraestructura que se abonan tanto al Consejo General de la Abogacía Española como al Consejo General de Procuradores de los Tribunales de España, y ello en aras de promover una notable mejora del servicio de la asistencia jurídica gratuita, que redundará, en suma, en beneficio de todos los ciudadanos.

Finalmente, en los últimos años ha venido quedando de manifiesto la necesidad de arbitrar un mecanismo que permita avanzar en una mayor armonización de la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita, que pasa, sin duda, por una especial cooperación entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en lo concerniente a la actividad desarrollada por las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita dependientes de ambos Ministerios, así como con las propias Comunidades Autónomas que han asumido competencias en materia de Administración de Justicia.

En este escenario, resulta especialmente relevante, asimismo, la participación del Consejo General de la Abogacía Española y del Consejo General de Procuradores de los Tribunales de España, en su condición de actores principales en la prestación de este servicio público.

A tal objeto, se crea un Consejo Asesor de Asistencia Jurídica Gratuita, con la finalidad de impulsar una mayor coordinación y unificación de criterios en la prestación de asistencia jurídica gratuita, donde estarán presentes todas las Administraciones con competencias en materia de Administración de Justicia, así como los operadores judiciales que participan, de forma directa, en el ejercicio de esta prestación, es decir, abogados y procuradores, que estarán representados a través del Consejo General de la Abogacía Española y del Consejo General de Procuradores de los Tribunales de España.

Este Consejo Asesor nace, de esta forma, con el objetivo final de establecer un punto de encuentro, en el que participen todos los operadores judiciales concernidos, con el propósito de compartir criterios de actuación, buenas prácticas y propuestas de mejora que redunden, en definitiva, en el fortalecimiento del servicio de asistencia jurídica gratuita.

Asimismo, este Consejo Asesor permitirá garantizar la igualdad de todos los ciudadanos, en el acceso a la asistencia jurídica gratuita, máximo garante del derecho a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos.

El presente real decreto se estructura en un artículo único de modificación del Reglamento, una disposición adicional única, una disposición derogatoria única y tres disposiciones finales.

Las normas para la aprobación de este real decreto de modificación del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita encuentran habilitación tanto en las remisiones específicas que la propia Ley 1/1996, de 10 de enero, efectúa, como en la habilitación general contenida en su disposición final primera.

La modificación del Reglamento, en su estructura, se ajusta a la sistemática de la ley que

desarrolla, intentando respetar, al igual que esta última, la estructura del texto normativo hasta ahora vigente y el contenido que se sigue considerando adecuado, señalándose a continuación los principales cambios efectuados.

Este real decreto ha sido informado por el Consejo General del Poder Judicial, por las comunidades autónomas con competencias asumidas en materia de Justicia, por el Consejo General de la Abogacía Española y por el Consejo General de los Procuradores de los Tribunales de España. Asimismo, ha sido informado por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda y por la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa.

En su virtud, a propuesta de las Ministras de Justicia y de Hacienda, con la aprobación previa del Ministro de Política Territorial y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día de de

DISPONGO:

Artículo único. *Modificación del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita aprobado por Real Decreto 996/2003, de 25 de julio.*

El Reglamento de desarrollo de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, aprobado por el Real Decreto 996/2003, de 25 de julio queda modificado como sigue:

Uno. Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del artículo 3, que quedan redactados en los siguientes términos:

«Artículo 3. *Composición y designación de miembros.*

1. La Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita estará compuesta por los Decanos del Colegio de Abogados y del Colegio de Procuradores de Madrid, o el abogado o procurador que ellos designen, un abogado del Estado y un funcionario del Ministerio de Justicia perteneciente a cuerpos o escalas del subgrupo A1. La Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita será presidida semestralmente por cada uno de sus miembros, a excepción del funcionario del Ministerio de Justicia, quien actuará, en todo momento, como secretario.

2. Las restantes Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita dependientes de las Comunidades Autónomas estarán integradas por el Decano del Colegio de Abogados y el del Colegio de Procuradores, o el abogado o el procurador que ellos designen, y por dos miembros que designen las Administraciones públicas de las que dependen. El órgano competente de la Comunidad Autónoma determinará cuáles de sus integrantes desempeñarán la presidencia y la secretaría.

3. En las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita dependientes de la Administración General del Estado, los miembros que corresponden a la Administración pública serán un abogado del

Estado, que actuará como presidente, y un funcionario, que actuará como secretario, perteneciente a cuerpos o escalas del subgrupo A1, con destino en la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia correspondiente o, en su defecto, un funcionario de los citados cuerpos o escalas que preste sus servicios en la Delegación o Subdelegación del Gobierno del territorio de que se trate. Para las comisiones de las islas, en las que no radica la capital de provincia, el funcionario será designado por el Director Insular de la Administración General del Estado, de entre los destinados en la respectiva Dirección Insular.

En las provincias donde exista más de un Colegio de Abogados o de Procuradores, su representante será designado de común acuerdo por los Decanos de éstos.

Cuando el volumen de asuntos u otras circunstancias justificadas lo aconsejen, podrán crearse Delegaciones de la Comisión Provincial Gratuita, previa autorización del Ministerio de Justicia, con la composición y ámbito de actuación que reglamentariamente se determinen y garantizando, en todo caso, la homogeneidad de criterios para reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita».

Dos. Se modifica el artículo 5, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 5. *Información sobre los servicios de asistencia jurídica gratuita.*

1. El Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de los Procuradores de los Tribunales de España remitirán a las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, en un formato que permita su tratamiento automatizado, las relaciones de colegiados ejercientes adscritos a los servicios de justicia gratuita, con indicación de su nombre y apellidos, el número de colegiado, domicilio profesional, el teléfono y, si la tuviere, la dirección de correo electrónico, así como detalle de las correspondientes especializaciones por órdenes jurisdiccionales o en las diversas ramas jurídicas.

Asimismo, en las sedes de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita se expondrán las normas de funcionamiento, sede y horarios de atención al público de los servicios de orientación jurídica de los colegios de abogados.

2. Será obligación del Consejo General de la Abogacía Española y del Consejo General de los Procuradores de los Tribunales de España el mantenimiento y actualización, con carácter mensual, de las bases de datos de sus colegiados dados de alta en los servicios de asistencia jurídica gratuita, con respeto a lo dispuesto en la legislación sobre protección de datos de carácter personal. Esta información estará a disposición de toda persona interesada en acceder a los servicios de justicia gratuita».

Tres. El apartado 1 del artículo 6, queda redactado en los siguientes términos:

«1. El funcionamiento de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita se ajustará a lo

establecido en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, y, con carácter general, se regirá por lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas».

Cuatro. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 9, que queda redactado en los siguientes términos:

«4. Las solicitudes de asistencia jurídica gratuita serán remitidas, en todo caso, de forma electrónica, por los Colegios de Abogados, o por el propio letrado, en el supuesto del apartado 3, a las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, a través del sistema establecido por el Ministerio de Justicia y por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De forma excepcional y, para el supuesto contemplado en el apartado 2, los interesados podrán presentar, en formato papel, y ante las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, las solicitudes de asistencia jurídica gratuita».

Cinco. El apartado 1 del artículo 18, queda redactado en los siguientes términos, y se elimina el apartado 4 del artículo 18:

«1. Transcurrido el plazo de treinta días establecido en el artículo 16 sin que la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita haya dictado resolución expresa, quedarán ratificadas las decisiones previas adoptadas por el Colegio de Abogados, sin perjuicio de la obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas».

Seis. El apartado 3 del artículo 20, queda redactado en los siguientes términos:

«3. La revocación del derecho será acordada por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita competente, de conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.»

Siete. El artículo 26, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 26. *Regulación y organización.*

1. Los Consejos Generales de la Abogacía Española y de Procuradores de los Tribunales de España aprobarán las directrices generales de organización y funcionamiento de los servicios de asistencia letrada de oficio, que serán comunicadas al Ministerio de Justicia, durante el mes de enero.

2. Los Consejos Generales de la Abogacía Española y de Procuradores de los Tribunales de España, aprobarán, a través de las Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados y

Procuradores, la distribución objetiva y equitativa de los turnos para la designación de los profesionales de oficio, que serán comunicadas al Ministerio de Justicia, durante el mes de enero, incluyendo la relación de servicios disponibles y el horario de atención, así como el número e identificación de abogados y procuradores que prestará el servicio en dicho ejercicio.

3. La organización de los servicios deberán garantizar su continuidad y, cuando el censo de profesionales lo permita, la especialización por órdenes jurisdiccionales, atendiendo a criterios de eficiencia y funcionalidad en la aplicación de los fondos públicos puestos a su disposición, velando por la distribución objetiva de turnos y medios.

Los sistemas de distribución de turnos y medios serán públicos para todos los colegiados que presten los servicios o estén adscritos a los turnos respectivos, y podrán ser consultados por la persona que solicite la asistencia jurídica gratuita. Además, serán expuestos en los tablones de anuncios y los medios telemáticos de los Colegios, actualizándose mensualmente».

Ocho. El apartado 2 del artículo 36, que queda redactado en los siguientes términos:

«2. Los libramientos de las subvenciones se efectuarán mensualmente.»

Nueve. Se modifican los apartados 3, 4 y 5 del artículo 39, que quedan redactados en los siguientes términos:

«3. Mensualmente, los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Procuradores de los Tribunales de España, así como las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, remitirán, por separado, al Ministerio de Justicia una certificación que contenga el número de expedientes tramitados por cada Colegio de Abogados y de Procuradores que han tenido entrada en las respectivas Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita en el mes anterior. La certificación mensual presentada por los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Procuradores de los Tribunales de España, deberá incluir, en un formato que permita su tratamiento automatizado, la información requerida en el artículo 43, apartado c).

4. Con base en las certificaciones mensuales que remitan los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Procuradores de los Tribunales de España, así como las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita y, previa revisión de las mismas, el Ministerio de Justicia efectuará los libramientos mensuales que correspondan, con cargo a sus dotaciones presupuestarias. Por las circunstancias que, en su caso, puedan concurrir en el calendario de cierre presupuestario de cada ejercicio, los libramientos correspondientes al último trimestre del año podrán ser objeto de pago en el ejercicio inmediatamente siguiente.

5. Para subvencionar el coste que generen, al Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo General de los Procuradores de los Tribunales de España, sus actuaciones en materia de asistencia jurídica gratuita, los citados Consejos percibirán mensualmente una cantidad igual a la resultante de aplicar el 11,5 por ciento al importe que corresponda a los colegios por los

expedientes tramitados en dicho periodo, según lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de este artículo.»

Diez. Se modifica el apartado 1 del artículo 40, que queda redactado en los siguientes términos:

«1. Los Consejos Generales de la Abogacía Española y de Procuradores de los Tribunales de España distribuirán, entre sus respectivos colegios, el importe de la subvención que corresponda a cada uno, en función del número de actuaciones profesionales realizadas y acreditadas por éstos ante los citados Consejos Generales, así como de los expedientes tramitados, durante el mes inmediatamente anterior al de cada libramiento».

Once. Se modifica el artículo 41, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 41. *Procedimiento de aplicación de la subvención.*

1. Mensualmente, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de los Procuradores de los Tribunales de España remitirán al Ministerio de Justicia sendas certificaciones que contenga los datos relativos al número y clase de actuaciones realizadas por cada colegio a lo largo del mes anterior, junto con la justificación del coste económico asociado a aquéllas. La certificación mensual deberá incluir, en un formato que permita su tratamiento automatizado, además de la información requerida en el artículo 43, apartados a) y b), el número de asistencias realizadas en cada servicio de guardia por cada profesional (solo en el caso del Consejo General de la Abogacía Española), y el número y detalle de prestaciones realizadas por cada profesional en cada expediente que tenga asignado.

2. Basándose en dichas certificaciones y, previa revisión de las mismas, el Ministerio de Justicia efectuará, a continuación, los libramientos mensuales que correspondan, sin perjuicio de las posteriores regularizaciones que procedan, una vez cumplimentada en su totalidad la justificación anual regulada en los artículos siguientes. Por las circunstancias que, en su caso, puedan concurrir en el calendario de cierre presupuestario de cada ejercicio, los libramientos correspondientes al último trimestre del año podrán ser objeto de pago en el ejercicio inmediatamente siguiente.»

Doce. Se modifica el artículo 42, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 42. *Justificación anual de la subvención.*

Dentro del primer cuatrimestre de cada año, los Consejos Generales de la Abogacía Española y de Procuradores de los Tribunales de España justificarán ante el Ministerio de Justicia la aplicación de la subvención percibida durante todo el ejercicio inmediatamente anterior. Si incumplieran dicha obligación, se suspenderán los sucesivos libramientos hasta que se rinda la cuenta. En el supuesto en que la cuenta justificativa fuese incompleta, por retraso u omisión de algún Colegio de Abogados o de Procuradores, se detraerá de los libramientos posteriores una cantidad igual a la última distribuida por los Consejos Generales a dichos colegios.

Las diferencias que puedan resultar de los libramientos realizados, conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo anterior, se regularizarán por parte del Ministerio de Justicia, durante el ejercicio en el que hubiera sido presentada dicha justificación y una vez cumplimentado el trámite de justificación anual.

Esta regularización incluirá, asimismo, los libramientos realizados, por parte del Ministerio de Justicia, en concepto de gastos de infraestructura y gastos operativos de los servicios de asistencia jurídica gratuita durante el ejercicio al que se refiera dicha regularización».

Trece. Se modifica el artículo 43, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 43. *Contenido de la justificación anual.*

1. La justificación anual de la aplicación de los fondos percibidos, a que se refiere el artículo anterior, deberá ser coherente con las certificaciones mensuales realizadas, según lo dispuesto en el artículo 41. Dicha justificación, de igual forma que las certificaciones mensuales, deberá ser presentada en un formato que permita su tratamiento automatizado.

2. La justificación anual, que deberá presentar el Consejo General de la Abogacía Española, comprenderá los siguientes extremos:

a) Para cada uno de los turnos se consignará:

1.º Número total de servicios de guardia realizados. Número de servicios de guardia realizados por meses y en cada uno de los colegios. Número total de servicios de guardia realizados por cada profesional, por meses y en cada uno de los colegios. Número de asistencias realizadas por cada profesional en servicios de guardia, por meses y en cada uno de los colegios.

2.º Cuantía percibida por cada colegio profesional, total y por meses, por los servicios y prestaciones consignadas en el apartado anterior. Justificantes que acrediten la percepción de estas cuantías. Cuantía percibida por cada profesional, total y por meses, por los servicios y prestaciones consignadas en el apartado anterior. Justificantes que acrediten el pago de estas cuantías.

b) De forma totalizada y, por cada tipo de procedimiento, se consignará:

1.º Número total, y desglosado por colegios profesionales, de expedientes que han tenido entrada en las comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, que han finalizado y que permanecen abiertos. Número de expedientes que han tenido entrada en las respectivas comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita y que han finalizado, por cada colegio profesional y desglosado por meses. Número de expedientes asignados a cada profesional, por meses y en cada uno de los colegios. Número de actuaciones realizadas por cada profesional, por

meses y en cada uno de los colegios (excluidas las correspondientes a servicios de guardia).

2.º Cuantía percibida por cada colegio profesional, total y por meses, por los servicios y actuaciones consignadas en el apartado anterior, así como justificantes que acrediten la percepción de estas cuantías. Cuantía percibida por cada profesional, total y por meses, por los servicios y actuaciones consignadas en el apartado anterior, así como justificantes que acrediten el pago de estas cuantías.

c) En relación a los gastos de funcionamiento e infraestructura, se consignará:

1.º Cuantía total percibida por los colegios profesionales de abogados, cuantía percibida por los colegios desglosada por meses y justificantes que acrediten la percepción de estas cuantías. Aplicación de estas cuantías a los gastos de los servicios de asistencia jurídica gratuita, consignando el detalle de aplicación de cada cantidad, por meses y colegios profesionales. Justificantes que acrediten el pago de estos gastos.

2.º Cuantía total percibida por el Consejo General de la Abogacía Española. Cuantía percibida por el referido Consejo General desglosada por meses. Aplicación de estas cuantías a los gastos de los servicios de asistencia jurídica gratuita, consignando el detalle de aplicación de cada cantidad por meses. Justificantes que acrediten el pago de estos gastos.

3.º Detalle de la aplicación realizada, en cumplimiento de los requisitos de formación y especialización necesarios para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita, por cada colegio profesional y por el Consejo General de la Abogacía Española, así como justificantes que acrediten el pago de estos gastos.

d) Importe de los intereses devengados, en su caso, por los sucesivos libramientos y aplicación de aquellos.

e) Desglose de las desviaciones habidas respecto a las certificaciones mensuales y justificación de las mismas.

3. La justificación anual que deberá presentar el Consejo General de Procuradores de los Tribunales de España, comprenderá los extremos señalados en los apartados b), c), d) y e) del apartado anterior».

Catorce. Se modifica el apartado 1 del artículo 46, que queda redactado en los siguientes términos:

«1. Antes de la realización de la prueba pericial, el técnico privado designado conforme a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 6.6 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita remitirá a la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia competente, por razón del territorio, para su aprobación, y conforme al procedimiento que establezca, normativamente, el Ministerio de

Justicia, una previsión del coste económico de aquélla, que incluirá necesariamente, al menos, los extremos siguientes:

- a) Tiempo previsto para la realización de la pericia y valoración del coste por hora.
- b) Gastos necesarios para su realización.
- c) Copia de la resolución judicial que dio lugar a la realización de la prueba.

La previsión inicial del coste remitida quedará automáticamente aprobada si, en el plazo de un mes, desde su remisión, la Gerencia Territorial no formula ningún reparo a su cuantificación».

Quince. Se introduce un nuevo Título con la siguiente redacción:

«TÍTULO V

El Consejo Asesor Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita

Artículo 47. *Objeto y finalidad.*

1. Se crea el Consejo Asesor Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita, como órgano colegiado, con el fin de impulsar una mayor coordinación en la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita entre todas las Administraciones Públicas con competencias en materia de Administración de Justicia, así como con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Procuradores de los Tribunales de España.

2. El Consejo Asesor Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita se adscribe al Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.

Artículo 48. *Funciones.*

1. Para el cumplimiento de los fines descritos en el apartado 1 del artículo anterior, el Consejo Asesor Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita tendrá las siguientes funciones:

a) Impulsar la coordinación entre las Administraciones Públicas con competencias en la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita y los operadores judiciales que participan en dicho servicio.

b) Asesorar al Ministerio de Justicia en el diseño, desarrollo e implantación de mecanismos de mejora del servicio de asistencia jurídica gratuita.

c) Elaborar propuestas normativas de mejora de la prestación de asistencia jurídica gratuita.

d) Contribuir a la evaluación y seguimiento del funcionamiento del servicio de asistencia jurídica gratuita.

e) Reforzar la coordinación institucional, mediante el intercambio y la difusión de buenas prácticas en el ejercicio del servicio de asistencia jurídica gratuita.

f) Cualquier otra función orientada a alcanzar los fines previstos en el artículo anterior.

Artículo 49. *Composición.*

1. El Consejo Asesor Estatal Asistencia Jurídica Gratuita de tendrá la siguiente composición:

- a) Presidencia: persona titular de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.
- b) Secretaría: persona titular de la Subdirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal.
- c) Vocales:

1º. Dos representantes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, uno de ellos, que rotará anualmente, en representación de las Subdelegaciones del Gobierno de las provincias adscritas a Comunidades Autónomas gestionadas por el Ministerio de Justicia, que no albergan Gerencia Territorial de Justicia.

2º Un representante del Consejo General de la Abogacía Española.

3º Un representante del Consejo General de Procuradores de los Tribunales de España.

4º Un representante, con rango de Director General, por cada Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia.

5º Un representante, designado por el Ministerio de Justicia y que rotará anualmente, por parte de las Gerencias Territoriales de Justicia del territorio gestionado por el Ministerio de Justicia.

2. Junto al vocal titular de la Comisión, se podrá designar un suplente, por cada uno de los citados órganos, para las distintas reuniones que se vayan celebrando. A tal efecto, se tendrá que comunicar a la Secretaría del Consejo Asesor Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita, con la suficiente antelación, el número y la identidad de los asistentes.

3. Asimismo, la Presidencia del Consejo Asesor Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita, podrá invitar a participar a sus reuniones, a iniciativa del Ministerio de Justicia o de cualquiera de sus miembros, a representantes de otras instituciones, expertos o cualquier persona cuando, en atención a las materias a tratar, así se considere oportuno.

Artículo 50. *Organización y régimen de funcionamiento.*

1. El Consejo Asesor Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita se regirá, en cuanto a su organización y funcionamiento, por lo establecido en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. En particular, los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos.

2. El Consejo Asesor Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita se reunirá, al menos, dos veces al año. No obstante, la Presidencia podrá convocar reuniones extraordinarias, por iniciativa propia o a instancia de cualquiera de sus vocales, cuando resultare necesario abordar algún asunto con carácter urgente o si así se estimara oportuno. Asimismo, se podrán celebrar reuniones virtuales del Consejo Asesor.

3. Con el fin de garantizar la operatividad en el cumplimiento de los fines del Consejo Asesor, se podrán crear, a propuesta de su Presidencia, grupos de trabajo, de acuerdo con las áreas de estudio, debate o diálogo que resulten de interés.

4. La Secretaría del Consejo Asesor Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita remitirá la convocatoria, junto con la propuesta de orden del día, a los vocales del Consejo Asesor Estatal, con al menos, dos semanas de antelación a la fecha de su celebración. Asimismo, los vocales podrán proponer, hasta una semana antes de la fecha prevista de celebración de la reunión, a la Secretaría del Consejo Asesor Estatal otros asuntos, para su inclusión en el orden del día.

5. La Secretaría del Consejo Asesor Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita recogerá en un acta lo tratado en cada reunión. A los efectos de la elaboración de las actas, las reuniones podrán ser grabadas, conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El acta, cualquiera que sea el formato en que se recoja, se hará llegar a los vocales para su conocimiento con posterioridad a la reunión y será sometida a aprobación del Consejo Asesor Estatal en la siguiente reunión.

6. Los vocales del Consejo Asesor Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita y los asistentes que no ostenten esa condición no percibirán retribución alguna por su participación en las reuniones.

Artículo 51. *No incremento de gasto.*

El funcionamiento del Consejo Asesor Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita no supondrá incremento alguno del gasto público y será atendido con los medios materiales y personales existentes en el Ministerio de Justicia.»

Dieciséis. Se modifica la disposición adicional única, que pasa a llamarse disposición adicional primera, quedando redactada en los siguientes términos:

«Disposición adicional primera. Autorización de cesión de datos personales a las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.

El tratamiento de los datos de naturaleza económica, fiscal, patrimonial y social se realizará según lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

En todos los casos, se anexará a la solicitud de asistencia jurídica gratuita un formulario de autorización o revocación expresa, que permita al solicitante autorizar o revocar la consulta, a las Administraciones Públicas pertinentes, de información económica, fiscal, patrimonial y social, relativa a su unidad familiar, por parte del Colegio de Abogados que vaya a tramitar su solicitud de asistencia jurídica gratuita y de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita correspondiente. Así mismo, en dicho formulario de autorización o revocación expresa, se informará al solicitante de lo establecido en los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.»

Diecisiete. Se añade una disposición adicional segunda, que queda redactada en los siguientes términos:

«Disposición adicional segunda. Referencias normativas.

Las referencias normativas efectuadas en otras disposiciones al Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, aprobado por el Real Decreto 993/2003, de 25 de julio, se entenderán realizadas a los preceptos correspondientes del Reglamento que se aprueba por este real decreto.»

Diecisiete. Se modifica el epígrafe 2. del apartado IV. Declaración responsable y solicitud, del Anexo I.I, que queda redactado en los siguientes términos:

«2. El tratamiento de mis datos personales se realizará según lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, siendo el fin del tratamiento el reconocimiento del derecho a asistencia jurídica gratuita, y siendo la comisión de asistencia jurídica gratuita que corresponda destinataria de mis datos».

Disposición derogatoria única. *Derogación normativa.*

A la entrada en vigor del presente real decreto quedarán derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el mismo.

Disposición final primera. *Título competencial.*

El presente real decreto se dicta en virtud del artículo 149.1.5ª de la Constitución Española, por el cual el Estado tiene competencia exclusiva sobre la Administración de Justicia.

Disposición final segunda. *Facultades de desarrollo y ejecución.*

Se faculta al titular del Ministerio de Justicia para dictar las disposiciones necesarias para el

desarrollo y ejecución del presente real decreto.

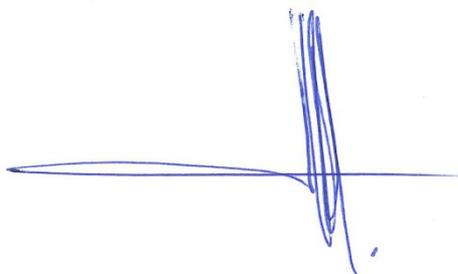
Disposición final tercera. *Entrada en vigor.*

El presente real decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

Dado en ..., el ... de ... de 2019

Adjunto se remiten las alegaciones formuladas por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española en el trámite de consulta pública de la reforma del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, aprobado por Real Decreto 996/2003, de 25 de julio.

Madrid a 8 de julio de 2019



Fdo. Antonio Morán Durán
Presidente Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita

sg.relaciones@mjusticia.es

ALEGACIONES del Consejo General de la Abogacía Española para el inicio de los trámites de reforma del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita.

1.- Parece acertado que la modificación del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita contemple las cuestiones que se mencionan en el texto remitido por el Ministerio de Justicia, y que constan en el documento por el que se hace público el trámite de consulta pública.

No obstante lo anterior desde el Consejo General de la Abogacía Española se traslada algunas materias que, se entiende, procede abordarse:

2.- Requisitos que han de cumplir los beneficiarios del sistema de asistencia jurídica gratuita.

A) Desde el punto de vista económico.

- Procedería revisar si, por la elevación del SMI efectuada recientemente, correspondería modificar al alza el importe del IPREM (o la cuantificación del número de mensualidades anuales a efectos de la concesión del beneficio de justicia gratuita). Al elevarse el SMI se ha producido la exclusión de determinados núcleos familiares del beneficio de justicia gratuita, familias que estaban sujetas al SMI.
- Procedería, con independencia de lo anterior, clarificar si el importe del IPREM ha de calcularse por 12 o por 14 mensualidades.
Hay criterios dispares.

B) Desde el punto de vista subjetivo.

Quizás -apurando los límites del ámbito reglamentario-, procedería ampliar entre los legitimados para obtener el beneficio de justicia gratuita:

- Las personas jurídicas imputadas penalmente:
 - Cuando reuniendo los requisitos establecidos en el art. 3.6. de la Ley, o en supuestos en que no conste su solvencia, no designen abogado o se requiera la designación de éste por el tribunal al Colegio de abogados correspondiente.
- Procedería concretar que, respecto a los trabajadores autónomos y empresarios personas físicas, a efectos de la concesión de la justicia gratuita se considerarán los ingresos netos, y no el volumen de ingresos brutos derivados de la actividad.
- Para las personas físicas en materia concursal, en la denominada “segunda oportunidad”.

3º.- Requisitos de los profesionales para el acceso a la prestación de los servicios.

Orden del Ministerio de Justicia de 3 de junio de 1997 (BOE nº 144, de 17 de junio de 1997), por la que se establecen los requisitos generales mínimos de formación y especialización necesarios para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita.

Procede que los requisitos exigibles a los profesionales que han de prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita se integren dentro del Reglamento evitando la dispersión normativa. Asimismo propiciará claridad y seguridad, evitando la incertidumbre existente hoy en día y derivadas de las actuaciones sancionadoras de las autoridades responsables de la defensa de la competencia.

Sin ánimo de agotar las cuestiones referidas a esta materia, procedería abordar los requisitos generales que se contemplan en el art. 1.1 de la Orden Ministerial:

- a) El requisito de que el letrado tenga despacho en el ámbito del Colegio responsable de organizar los servicios.
El texto reglamentario añade que el letrado, además, tenga su residencia habitual.
- b) El requisito del previo ejercicio profesional durante tres años.
Existen criterios dispares sobre si las prácticas obligatorias que han de realizar los alumnos que cursan los estudios de postgrado tendentes a acceder al examen de Estado (Ley 34/2006) influyen en este plazo.
- c) Sobre el requisito de los cursos previos establecidos en la letra c) del art. 1.1., entendemos que procedería mantenerse, incluso con la excepción del punto 2.

4.- Tramitación de forma electrónica de los expedientes de asistencia jurídica gratuita.

En la concreción que haya de hacerse en el Reglamento sobre la tramitación electrónica de los expedientes habría que considerar y reconocer las plataformas ya creadas por la Abogacía española (SIGA) como medio idóneo para ello, evitando la multiplicidad de sistemas o plataformas electrónicas.

Asimismo sería necesario una mayor accesibilidad y sencillez en las sedes electrónicas de las Administraciones que no puedan acceder a SIGA para que puedan ser utilizadas -en todas sus capacidades- por los profesionales y sus Colegios. Reglamentariamente se podría delimitar algunas de estas cuestiones.

5.- Extensión de la garantía indemnizatoria a los profesionales en los supuestos de denegación del beneficio de justicia gratuita por causas imputables al justiciable, cuando se haya realizado efectivamente la tarea profesional del abogado.

En tales supuestos se dará cobertura a las Comisiones Provinciales de Justicia Gratuita para que, detectados estos supuestos, dictase Resolución acordando reclamar al ciudadano las cantidades pagadas por la Administración, ejecutando el acuerdo incluso por vía de apremio. (A tal efecto, en el párrafo 2 del art. 20 se contempla esta posibilidad, si bien para el supuesto de revocación del beneficio.

Lo anterior supondría una modificación del artículo 21 del Reglamento.

6.- Regulación de los denominados macro-juicios.

Al menos procedería reconocer la existencia de determinados procesos judiciales extraordinarios, estableciendo criterios para otorgar tal consideración así como para dar solución a la carga de trabajo que genera a los profesionales que necesariamente han de intervenir en ellos.

7.- Garantía de la intervención de intérprete y traductor, cuando éste proceda, no solo en las actuaciones procesales sino incluso para asistir al letrado que ha de preparar la defensa del caso cuando ha de entrevistarse con el defendido.

8.- Revisión del desarrollo reglamentario del artículo 36 de la Ley, sobre el reintegro económico.

9.- Revisión del Anexo II del Reglamento, en el que se contiene los módulos y bases de compensación por las intervenciones de los profesionales en los distintos servicios que constituyen la asistencia jurídica gratuita. Procedería ampliar el catálogo de módulos.

10.- Revisión de la dotación económica para los gastos de infraestructura, tanto de los Colegios como del Consejo General.

Procede recordar que el Anexo II del Reglamento fue recientemente revisado tras muchos años congelado, pero no así los criterios que se contienen en el art. 39 del Reglamento.